

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS No. 353/2018
DENUNCIANTE: [REDACTED]

MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA
P R E S E N T E.-

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], de generales conocidas en el expediente de la Contradicción de Criterios, (antes Contradicción de Tesis), como parte quejosa y recurrente en el amparo en revisión [REDACTED] del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, materia de dicha contradicción, al rubro indicada, ante usted, respetuosamente, comparezco a solicitar:

- 1.** Se autorice tener acceso a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, al expediente electrónico formado en el presente asunto, a efecto de tener la consulta electrónica correspondiente, a los usuarios **egarza90 y allopvaldes**, así como para efectuarse las notificaciones vía electrónica; señalando para tal efecto las Claves Únicas del Registro de Población [REDACTED] y [REDACTED], cuyas cuentas cuentan con la Firl vigente (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación).
- 2.** Solicito se tenga autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los CC. Abogados [REDACTED]
- 3.** Se me autorice a todos los mencionados el uso de aparatos electrónicos de fotografía y/o video, o cualesquier otro para la reproducción de las constancias del expediente en que se actúa.
- 4.** Se proporcione a cualquiera de los autorizados copias certificadas por duplicado de la resolución que recaiga al presente asunto, así como del presente documento, y de las medidas y acciones que deriven de la presente solicitud, para su ofrecimiento ante el órgano internacional de derechos humanos y Relator Especial.
- 5.** Además, solicito en términos de los artículos 13, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se expresen en el proyecto de resolución que la ponencia emita con relación a la presente Contradicción de Criterios, sostenga el criterio sostenido en el Voto Concurrente relativo al juicio de amparo en revisión [REDACTED] siendo ineludible atender al PRECEDENTE en el voto concurrente, o en su caso, ha de aclararse de manera reforzada la diferenciación de su postura ante la reparación integral a la violación de los derechos humanos, lo anterior en aplicación de la Tesis de Jurisprudencia 125/2017, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario

Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 121, que dice:

DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. RECONOCIMIENTO DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. El derecho humano a la igualdad jurídica ha sido tradicionalmente interpretado y configurado en el ordenamiento jurídico mexicano a partir de dos principios: el de igualdad ante la ley y el de igualdad en la ley (los cuales se han identificado como igualdad en sentido formal o de derecho). El primer principio obliga, por un lado, a que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en una misma situación y, a su vez, a que los órganos materialmente jurisdiccionales no puedan modificar arbitrariamente sus decisiones en casos que compartan la misma litis, salvo cuando consideren que deben apartarse de sus precedentes, momento en el que deberán ofrecer una fundamentación y motivación razonable y suficiente. Por lo que hace al segundo principio, éste opera frente a la autoridad materialmente legislativa y tiene como objetivo el control del contenido de la norma jurídica a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio. No obstante lo anterior, debe destacarse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ciega a las desigualdades sociales, por lo que contiene diversas protecciones jurídicas a favor de grupos sujetos a vulnerabilidad, a través, por ejemplo, de manifestaciones específicas del principio de igualdad, tales como la igualdad entre el varón y la mujer (artículo 4o., párrafo primero) y la salvaguarda de la pluriculturalidad de los pueblos indígenas de manera equitativa (artículo 2o., apartado B). Así, la igualdad jurídica en nuestro ordenamiento constitucional protege tanto a personas como a grupos. De ahí que se considere que el derecho humano a la igualdad jurídica no sólo tiene una faceta o dimensión formal o de derecho, sino también una de carácter sustantivo o de hecho, la cual tiene como objetivo remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social.

Es deber del órgano jurisdiccional atender al precedente y resolver en cumplimiento al <Derecho de Igualdad> de los quejosos, para que se sostenga de igual manera, el derecho a la reparación integral a la violación a los derechos humanos.

En términos del artículo 1º, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 2, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los principios I, numeral 2, inciso c); II, numeral 3, incisos c) y d); VIII, numeral 14; y, IX numeral 15, 18 y 20 de la resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, que aprueba los Principios y Directrices Básicos Sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones; y los artículos 8, 25 y 63.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, solicito disponga las MEDIDAS NECESARIAS Y URGENTES para la efectividad del derecho fundamental a la REPARACIÓN DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS.

Con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del año 2011 en materia de derechos humanos, reconoció desde el texto del artículo primero, que todas las personas gozan de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte; el párrafo tercero establece que todas las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus competencias, tienen el deber de prevenir, investigar, sancionar y REPARAR las violaciones a los derechos humanos.

El artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 2, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre derechos Humanos, establecen el derecho a un recurso a las víctimas de las violaciones de las normas internacionales de derechos humanos.

La resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, que aprueba los Principios y Directrices Básicos Sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones. En los principios I, numeral 2, inciso c); II, numeral 3, incisos c) y d); VIII, numeral 14; y, IX numeral 15, 18 y 20; ordenan disponer para las víctimas los recursos suficientes, eficaces, rápidos, que incluyan la REPARACIÓN plena y efectiva, en las formas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

No excluye al Poder Judicial de la Federación, todas las autoridades mexicanas, en el ejercicio de sus funciones, tienen el deber de hacer efectivo el derecho fundamental de la REPARACIÓN. Abarca el deber a los Ministros, Magistrados y Jueces a proveer a la efectiva REPARACIÓN de los derechos de las personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos, de ahí la relevancia del Criterio Unificador en el cumplimiento al derecho humano a la reparación integral de la violación a los derechos humanos.

Los derechos humanos y libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes, el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a la libertad, a la justicia, están vinculados en su eficacia a la REPARACIÓN. La reparación integral se reconoce como un aspecto fundamental para restablecer la dignidad de las víctimas y garantizar el ejercicio efectivo o reparación de otros derechos, como el de la vida, la integridad física, la salud y/o acceso a la justicia.

PROTESTO A USTED MIS RESPETOS
San Pedro Garza García, N. L. a 27 de Septiembre de 2022.

[Redacted signature]

5e928d88ec6132c1ebe617ab459a4a7b158edf3f8553fba898c750a858dc5cc1

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

5e928d88ec6132c1ebe617ab459a4a7b158edf3f8553fba898c750a858dc5cc1